

Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
**TRIBUNAL DE APELACIONES**  
**REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ Y UTUADO**  
**PANEL XI**

José A. Camacho  
Rivera

Peticionario

vs.

Pedro L. Damoudt  
Castillo y Lilliam  
Andino García

Recurrido

KLCE201600687

**CERTIORARI**

procedente del  
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala  
Superior de San  
Juan

Sobre: Cobro de  
Dinero Regla 60

Civil Núm.  
K CM2013-1173

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa

**SENTENCIA**

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2016.

**-I-**

Comparece el señor José A. Camacho Rivera (Sr. Camacho Rivera), por derecho propio, mediante la presente petición de *certiorari*. Junto al recurso, presentó una “Declaración en Apoyo de Solicitud para Litigar como Indigente (In Forma Pauperis)”. Evaluada la misma, la declaramos Ha Lugar y se le exime del pago de los aranceles correspondientes.

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, la totalidad del expediente, así como el estado de derecho aplicable, procedemos con la disposición del presente recurso mediante los fundamentos que exponremos a continuación.

**-II-**

En nuestro ordenamiento jurídico prevalece una clara política pública judicial de que los casos se ventilen en sus

méritos. *Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima*, 154 DPR 217, a las págs. 221-222 (2001); *Amaro González v. First Fed. Saus.*, 132 DPR 1042, a la pág. 1052 (1993); *Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al.*, 132 DPR 115, a la pág. 124 (1992). Por tanto, es deber ineludible de un tribunal de justicia lograr que todo proceso adjudicativo se oriente en hallar la verdad y hacer justicia. *Isla Verde Rental v. García*, 165 DPR 499, a la pág. 505 (2005); *Valentín v. Mun. de Añasco*, 145 DPR 887, a la pág. 897 (1998). Los tribunales siempre deben procurar un balance entre el interés en promover la tramitación rápida de los casos y la firme política judicial de que éstos sean resueltos en su fondo. *Banco Popular v. S.L.G. Negrón*, 164 DPR 855, a las págs. 864-865 (2005). Es de suma importancia que el fin de las reglas procesales sea viabilizar ese propósito, no obstaculizarlo. *Pueblo v. Miranda Santiago*, 130 DPR 507, a la pág. 514 (1992).

Sin embargo, existen situaciones extremas que hacen necesario que los tribunales ejerzan su autoridad y tomen medidas para hacer valer su función de hacer justicia. Aunque la política pública judicial y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, apuntan a evitar la desestimación de los recursos apelativos, siempre queda vigente la facultad del Tribunal para desestimar por defectos en su presentación o por falta del adecuado diligenciamiento para el debido perfeccionamiento. *Arriaga v. F.S.E.*, 145 DPR 122, a las págs. 126-132 (1998); *Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales*, 113 DPR 494, a las págs. 498-499 (1982). En la práctica apelativa los comparecientes vienen obligados a cumplir fielmente el trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los pleitos instados ante el tribunal. *Matos v. Metropolitan Marble Corp.*, 104 DPR 122, a la pág. 125 (1975). Las crasas violaciones a nuestro Reglamento, *supra*, y a los estatutos pertinentes, impiden

que este Foro tome posición para pasar juicio; no tan solo sobre los argumentos planteados, sino también para determinar si se goza de jurisdicción para entender en el recurso.

En el Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura del año 2003, Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24, *et seq.*, en relación a la competencia del Tribunal de Apelaciones, se establece la importancia de brindar acceso fácil, económico y efectivo a la ciudadanía, así como permitir la comparecencia efectiva de ciudadanos por derecho propio. *Fraya v. A.C.T.*, 162 DPR 182, a las págs. 189-190 (2004); *Salinas v. S.L.G. Alonso*, 160 DPR 647, a la pág. 658 (2003). No obstante, por razón de las comparecencias *in forma pauperis*, no podemos obviar normas que rigen la presentación de los recursos. El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió en el caso de *Febles v. Romar*, 159 DPR 714, a la pág. 722 (2003), que el hecho de que las partes acudan a un tribunal por derecho propio, por sí solo, no justifica el incumplimiento de éstas con las reglas procesales. Además, es doctrina reiterada que el incumplimiento con los requerimientos establecidos y las violaciones crasas a nuestro Reglamento, *supra*, pueden servir de fundamento para la desestimación de una comparecencia. *Cárdenas Maxán v. Rodríguez*, 119 DPR 642, a la pág. 644 (1987).

Por su parte, la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, *supra*, regula el contenido de la solicitud de *certiorari*. En lo pertinente, una petición de *certiorari* debe incluir: (1) una cubierta que incluya el epígrafe, la información sobre los abogados y las partes y la información del caso; (2) un índice del recurso y de las autoridades citadas; (3) el cuerpo del recurso, y (4) un apéndice. Regla 34 del Reglamento, *supra*, incisos A, B, C y E. Particularmente, la Regla 34(C)(1) dispone que el cuerpo del recurso debe abarcar los siguientes puntos, a saber:

.....

(a) *En la comparecencia, el nombre de las partes peticionarias.*

(b) *Las citas de las disposiciones legales que establecen la jurisdicción y la competencia del Tribunal.*

(c) *Una referencia a la decisión cuya revisión se solicita, la cual incluirá el nombre y el número del caso, la Región Judicial correspondiente, la Sala del Tribunal de Primera Instancia que la dictó; la fecha en que lo hizo y la fecha en que fue notificada; [...]*

**(d) Una relación fiel y concisa de los hechos procesales y materiales del caso.**

**(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que a juicio de la parte peticionaria cometió el Tribunal de Primera Instancia.**

**(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo las disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicable.**

**(g) La súplica.**

(Énfasis suplido).

.....

Asimismo, la Regla 34(E) del Reglamento, *supra*, dispone que la petición de *certiorari* debe incluir un apéndice con la siguiente información:

.....

(a) *Las alegaciones de las partes, a saber:*

*-en casos civiles: la demanda principal, la de coparte o de tercero y reconvención, con sus respectivas contestaciones;*

*-en casos criminales: la denuncia y la acusación, si la hubiere.*

(b) *La decisión del Tribunal de Primera Instancia cuya revisión se solicita, incluyendo las determinaciones de hechos y las conclusiones de derecho en que esté fundada, si las hubiere y la notificación del archivo en autos de copia de la notificación de la decisión, si la hubiere.*

(c) *Toda moción debidamente sellada por el Tribunal de Primera Instancia, resolución u orden necesaria para acreditar la interrupción y reanudación del término para presentar la solicitud de certiorari y la notificación del archivo en autos de copia de la resolución u orden.*

(d) *Toda resolución u orden, y toda moción o escrito de cualesquiera de las partes que forme parte del expediente original en el Tribunal de Primera Instancia, en los cuales se discuta expresamente cualquier asunto planteado en la solicitud de certiorari, o que sean relevantes a ésta.*

(e) *Cualquier otro documento que forme parte del expediente original en el Tribunal de Primera Instancia y que podrá ser útil al Tribunal de Apelaciones a los fines de resolver la controversia.*

. . . . .

Cónsono con la Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, *supra*, R. 83 (B) y (C), sostenemos que las partes deben cumplir con las disposiciones reglamentarias establecidas para la presentación y forma de los recursos, y su incumplimiento puede dar lugar a la desestimación. *Arriaga v. F.S.E.*, *supra*, a las págs. 129-130; *Vázquez v. A.R.P.E.*, 128 DPR 513, a la pág. 537 (1991); *Cárdenas Maxán v. Rodríguez*, *supra*, a la pág. 659; *Matos v. Metropolitan Marble Corp.*, *supra*, a la pág. 126.

**-III-**

Luego de evaluar el expediente ante nuestra consideración nos percatamos que el Sr. Camacho Rivera no ha presentado una petición de *certiorari* que contenga, entre otros requerimientos, una relación fiel y concisa de los hechos procesales y materiales del caso como lo requiere el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, *supra*. Llama la atención del Tribunal que el peticionario ni siquiera formuló un señalamiento de error en relación a la determinación recurrida y tampoco incluyó las disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicable. A esos efectos, es menester destacar que este Tribunal no está obligado a atender un recurso de *certiorari*, el cual es un mecanismo extraordinario y discrecional, mucho menos si carecemos de jurisdicción para considerar sus méritos, o si se incurre en un craso incumplimiento con la ley y con las reglas que regulan su

perfeccionamiento. Véase, *Feliberty v. Soc. de Gananciales*, 147 DPR 834, a las págs. 837-838 (1999). Reiteramos que el hecho de que la parte comparezca por derecho propio, por sí solo, no justifica el incumplimiento de las reglas procesales aplicables.

*Febles v. Romar, supra.*

En consideración a lo anterior, concluimos que el Sr. Camacho Rivera venía obligado a cumplir fielmente con el trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el debido perfeccionamiento del recurso ante nos, dentro del término establecido. Sin lugar a dudas, al examinar el escrito de autos no surge que el mismo haya sido presentado conforme lo establece nuestro ordenamiento procesal apelativo, éste adolece de un sinnúmero de requisitos esenciales convenidos para su debido perfeccionamiento. Así pues, no estamos en posición para atender y considerar la controversia sometida, solo procede la desestimación de la misma por falta de jurisdicción.

**-IV-**

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso de *certiorari* presentado por el señor José A. Camacho Rivera en virtud de la Regla 83 (B)(3) y (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones